

## ¿Hacia una América Latina menos desigual?<sup>1</sup>

Diego Sánchez-Ancochea  
Profesor titular de Economía Política de América Latina  
Universidad de Oxford

Ponencia inicialmente preparada para el Seminario Polarización y Conflicto en América Latina organizado por el Institut Catala Internacional per la Pau, Barcelona, 5-6 Mayo 2011

### Resumen

En la última década la desigualdad en el ingreso parece haber disminuido en América Latina. Durante los 2000s, el coeficiente de Gini disminuyó en 12 de los 17 países principales de la región y sólo aumentó de forma clara en Costa Rica y Colombia. La caída de la desigualdad ha sido especialmente llamativa en Brasil donde, además, se habla de la aparición de una nueva clase media. Este aparente éxito, que se ha mantenido en los dos últimos años de crisis global, ha llevado a algunos autores a hablar de una ruptura histórica e incluso de un nuevo modelo social demócrata en la región (Cornia, 2011; Lopez-Calva y Lustig, 2009).

¿Cuáles han sido los determinantes de esta caída? Más importante aún, ¿son sostenibles en el tiempo? Este capítulo ofrece algunas respuestas preliminares a estas preguntas a través de una revisión de la literatura reciente y de la discusión de algunos casos que nos parecen paradigmáticos. La caída reciente parece ser resultado, sobre todo, de mejoras en la formalidad del empleo y de algunos programas sociales exitosos. Sin embargo, la falta de modificaciones importantes en el modelo económico que domina en la mayor parte de la región (y que crea una profunda heterogeneidad estructural entre sectores) pone en cuestión la sostenibilidad futura de los logros recientes. Estas características negativas del modelo económico podrían también repercutir negativamente a los conflictos discutidos en otras ponencias de la conferencia.

---

<sup>1</sup> Agradezco a Salvador Martí y a Rafael Grassa la invitación a la conferencia donde se discutió este capítulo y todos los comentarios recibidos durante la misma y con posterioridad.

“La transformación radical del sistema agrario y de las relaciones sociales en que se basa, a la que debe acompañar un contexto de mayor equidad ...se convierte en un elemento clave de la capacidad de gestionar la conflictividad y la polarización” (Grasa y Martí, 2010)

## 1. Introducción

Empezar una ponencia sobre desigualdad en América Latina diciendo que la región es una de las más desiguales del planeta—por mucho que sea verdad—resulta algo manido. La novedad no es esa sino el hecho de que una mayoría de países de la región han experimentado una reducción significativa de la desigualdad en la última década. De 2001 a 2009, 12 de los 17 países de la región experimentaron una caída del coeficiente de Gini. Entre ellos, se encuentran tanto los países más grandes de la región (Brasil y México), como el que más ha crecido en las últimas décadas (Chile) como algunos de los tradicionalmente más desiguales (El Salvador y Guatemala).

Aunque todavía no disponemos de un cuadro completo de los determinantes de este proceso tan positivo, los pocos estudios realizados ponen el acento en el papel de la educación y la política social en los buenos resultados obtenidos. El aumento en la cualificación de la mano de obra ha llevado a una reducción de la diferencia salarial entre distintos trabajadores y la expansión de la política social orientada a los más pobres (especialmente las transferencias condicionadas) ha mejorado el impacto redistributivo del estado.

¿Cuán sostenible es esta reducción de la desigualdad en el futuro? ¿Nos encontramos ante una verdadera ruptura en las tendencias experimentadas en las últimas décadas, sino siglos? Contestar a estas dos preguntas es esencial para evaluar la relevancia de los cambios de las últimas décadas y comprender mejor la estructura socioeconómica en la que tienen lugar muchos de los procesos sociopolíticos descritos en otros capítulos de este libro.

Este capítulo no trata de ofrecer respuestas definitivas a estas preguntas, puesto que todavía carecemos de información suficiente. En su lugar, revisamos la literatura existente sobre la desigualdad reciente y ofrecemos algunas propuestas para evaluar su sostenibilidad en el largo plazo. Lograr ésta, seguramente, pase por un cambio gradual en el modelo económico—que contribuya a una reducción significativa de la heterogeneidad estructural—junto a la creación de vinculaciones más constructivas entre modelo económico y relaciones políticas.

El capítulo está dividido en tres secciones. La primera describe la evolución de la desigualdad en la última década destacando la caída general pero reconociendo también

algunas excepciones significativas. La segunda revisa las explicaciones dominantes sobre la alta desigualdad de la región como preámbulo para evaluar los procesos socioeconómicos de los últimos años. Ponemos el acento en la importancia (no siempre reconocida) del modelo productivo que, en los casos exitosos, debería generar un incremento sostenido de la productividad y reducciones en la heterogeneidad estructural. La tercera sección discute los determinantes de la caída reciente en el coeficiente de Gini y pone en cuestión su sostenibilidad futura debido al poco cambio en el modelo económico regional. El capítulo concluye con una serie de reflexiones sobre la vinculación entre el análisis económico-estructural y las discusiones más políticas del resto del libro.

## **2. La reducción en la desigualdad del ingreso en América Latina en la última década**

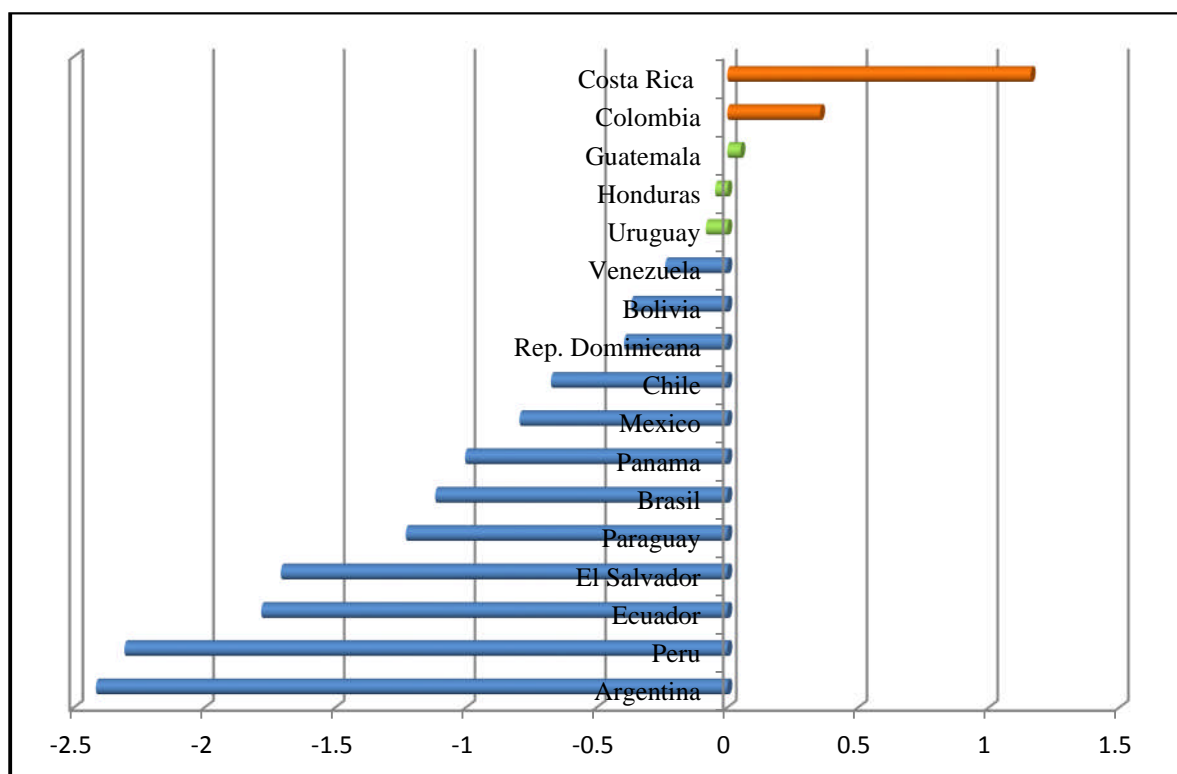
Tratar de analizar los cambios en la distribución de la renta en menos de una década es siempre complicado ya que las fuentes utilizadas tienen mucho ruido. Por un lado, el ingreso familiar suele experimentar cambios coyunturales en distintos momentos del ciclo económico que no se perpetúan en el medio y largo plazo. Por otro, las encuestas de hogares que todos los estudios utilizan suelen reflejar en muchos casos modificaciones ficticias en la distribución al no recoger de forma adecuada el ingreso de los más ricos.

Aunque uno debería, por tanto, ser cauteloso en el análisis de los datos existen una serie de indicadores que muestran una moderada reducción de la desigualdad en los últimos años. La figura 1 refleja la tasa de crecimiento medio anual del coeficiente de Gini durante los 2000s para la mayoría de países latinoamericanos utilizando la información recogida en la excelente base de datos elaborada por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de la Plata (Uruguay) en colaboración con el Banco Mundial. Durante ese periodo, la desigualdad cayó en 12 de los 17 países incluidos en la muestra, se mantuvo estable en tres (Guatemala, Honduras y Uruguay) y sólo aumentó en dos (Colombia y Costa Rica). Esta situación contrasta con la de los años 90 cuando, de acuerdo a los cálculos de Cornia (2010) la desigualdad aumentó en 11 de los 17 países de la región.<sup>2</sup> En los años 80, durante la crisis de la deuda, se produjo una situación similar, con empeoramientos distributivos en la mayoría de la región.

---

<sup>2</sup> Entre los 17 países recogidos por Cornia (2010) se encuentra Nicaragua (que no aparece en nuestra tabla por falta de datos) pero no la República Dominicana (puesto que él se concentra en la América Latina continental).

**Figura 1. América Latina. Evolución del coeficiente de Gini, principios a finales de 2000s**



Fuente: cálculos propios con datos de CEDLAS

NOTA: el primer año elegido es el más cercano a 2000 y el último el más reciente.

Nicaragua no aparece por falta de datos.

Si bien es cierto que la reducción de la desigualdad es en general moderada y, por tanto, no conviene formular conclusiones muy definitivas en torno a estos resultados, hay algunos países donde la trayectoria ha sido bastante llamativa. Los dos países con un mejor comportamiento son Argentina y Perú, donde el Gini cayó una tasa media anual de más del 2% a partir de 2003<sup>3</sup>. En ambos países, este cambio de tendencia se dio después de una década de los noventa bastante convulsa en la que reformas neoliberales bastante radicales afectaron de forma particularmente negativa a los trabajadores con bajos niveles de cualificación (Lopez Calva y Lustig, 2010). También resulta llamativo el caso de El

<sup>3</sup> De todas maneras, hay que reconocer que existen dudas significativas sobre la medición del coeficiente de Gini en ambos países. En el caso de Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas ha sido acusado de infravalorar el valor de la inflación en los últimos años y de esa forma afectar la medición de los índices de pobreza y desigualdad. En Perú, la dependencia del sector minero que genera altas rentas y beneficios durante los periodos de boom que no son reflejadas en las encuestas de hogares hace que algunos de los resultados sean cuestionables. Se trata de un país donde, además, ha pruebas evidentes de una tendencia desigual en el largo plazo (Thorpe y Paredes, 2009).

Salvador y Ecuador, donde las mejoras distributivas empezaron con gobiernos de derechas y se profundizaron aun más con la elección de gobiernos más progresistas.

La literatura reciente ha destacado también la experiencia de Brasil, que ha venido experimentando mejoras en el coeficiente de Gini desde los años 90 cuando el Plan Real consiguió controlar un proceso hiperinflacionario que había tenido consecuencias muy negativas sobre los más pobres (Clements, 1997). De acuerdo con datos de IPEA, el coeficiente de Gini pasó de 0.634 en 1989 a 0.592 en 1999 y a 0.552 en 2007—disminuyendo todavía más en los dos últimos años como muestra nuestra tabla. El crecimiento del ingreso para los más pobres ha sido espectacular en los últimos años: de 2002 a 2007, por ejemplo, el ingreso per cápita de las familias pobres aumentó a una tasa media de 9% comparado con sólo 4% para los más ricos (IPEA, 2008).<sup>4</sup>

La figura 2 aporta más información comparada sobre la evolución de la distribución de la renta en años recientes y nos permite identificar países estrella y rendimientos decepcionantes. La figura compara el cambio medio anual en el porcentaje del ingreso recibido por el 10% más rico y el más pobre de la población en los 17 países que aparecen en la figura 1. Obviamente, existe una relación inversa entre ambas variables puesto que la reducción del ingreso relativo de los más ricos normalmente se traduce en el aumento del de todos los demás grupos—incluyendo los más pobres.

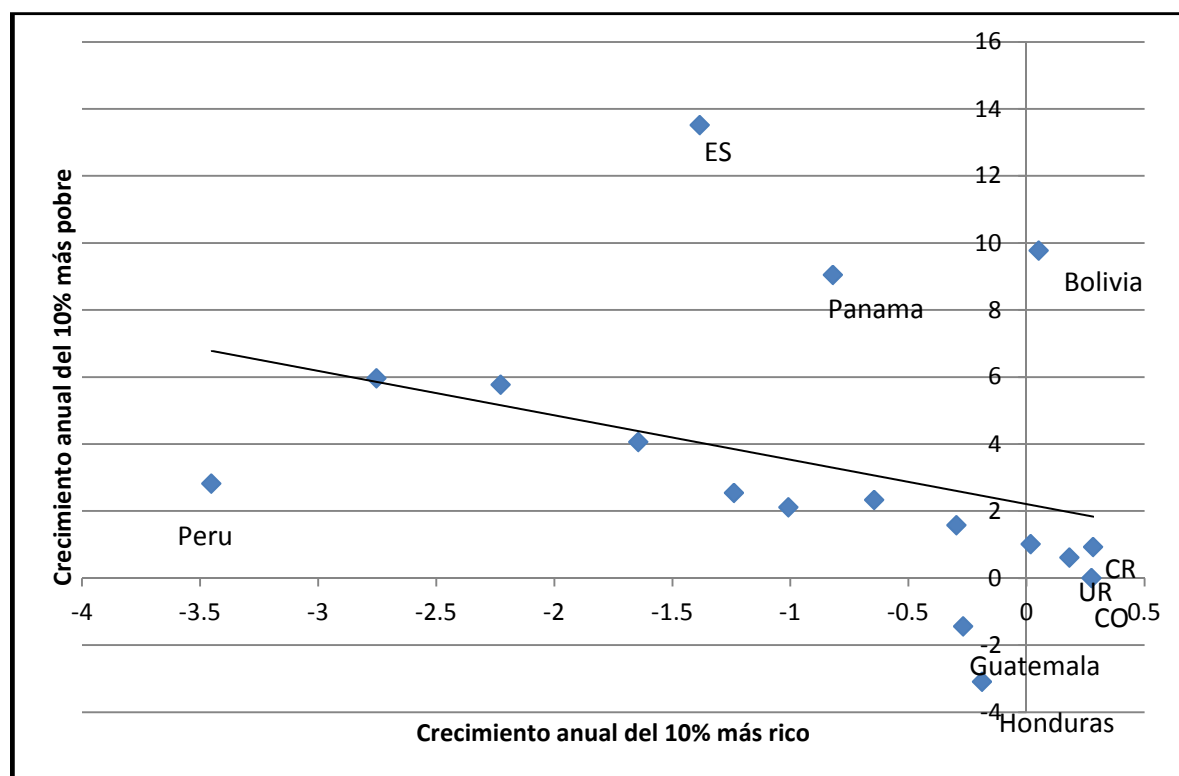
El gráfico muestra como en casi todos los países se ha dado, efectivamente, una caída por año de entre 0.1% y 3.5% en el peso relativo del decil más alto y un aumento de hasta un 14% en el más bajo. Lo más interesante son, en todo caso, las excepciones—países que por uno otro motivo se salen de la tendencia media. Podemos identificar cuatro casos distintos:

a. El caso único de Perú, donde se da la caída más alta en el ingreso de los más ricos (3.5% anual) que repercute de forma positiva en el ingreso de todos los grupos sociales, incluyendo en el decil más pobre. Se trata de una redistribución top-down que resulta bastante sorprendente cuando se considera las características de la economía peruana en etapas de boom de la minería.

---

<sup>4</sup> Familias pobres son aquellas que tiene un ingreso per cápita menor a la mitad del salario mínimo. Las familias ricas son aquellas que tienen un ingreso medio al menos 25 veces mayor al salario medio.

**Figura 2. Comparación entre el decil más pobre y el más rico, tasa de crecimiento medio anual, principios 2000s-finales 2000s**



Fuente: elaboración propia con datos de CEDLAS

b. Países donde se da un aumento muy significativo del ingreso de los más pobres sin que los ricos se vean particularmente afectados. Aquí los casos más significativos son el de El Salvador (donde el decil más pobre pasó de controlar sólo un 0.7% del ingreso nacional en 2001 a recibir un 1.7% en 2008), Panamá y Bolivia (donde se produjo un aumento en el peso tanto de los más pobres como, en mucho menor medida, de los ricos).

c. Países donde aumenta el ingreso relativo controlado por los más ricos, aunque no a costa de los más pobres. Es el caso de Colombia (donde, sin embargo, la consistencia de los datos es cuestionable), Costa Rica y Uruguay. Estos dos últimos son casos particularmente interesantes: se trata de dos de los países más igualitarios en la región pero que, sin embargo, han experimentado empeoramientos de la distribución como consecuencia de la mayor concentración del ingreso entre los más ricos.

d. Por último en Honduras y Guatemala el porcentaje recibido por los más pobres cae durante ese periodo. En ambos casos habido una pequeña redistribución desde los más ricos a los deciles intermedios—por eso el coeficiente de Gini permaneció estable—pero, lamentablemente, los pobres no se han beneficiado de ella.

### **3. ¿Por qué es América Latina tan desigual? Un repaso a teorías dominantes**

La reducción en los coeficientes de Gini en los últimos años es indudablemente una gran noticia, sobre todo porque viene a revertir la tendencia negativa anterior. Pero, ¿se trata de una reducción coyuntural de la desigualdad o nos encontramos ante un cambio significativo de tendencia? ¿Está América Latina “rompiendo con su historia” como el Banco Mundial pedía en su informe del año 2003? Aunque no es fácil todavía contestar a estas preguntas por la brevedad del periodo analizado, el resto del capítulo trata de ofrecer algunas respuestas preliminares.

Para ello, lo más importante es evaluar si se están dando las condiciones para asegurar la sostenibilidad y la profundización de los logros recientes. Para determinar si esto es así en los distintos países resulta útil considerar las teorías principales que han tratado de explicar por qué América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. De alguna manera, la sostenibilidad de las tendencias positivas actuales se dará si y sólo si se revierten esos factores negativos del pasado.

La teoría dominante—al menos en el mundo Anglosajón—sobre la alta desigualdad latinoamericana se remonta al periodo colonial y pone el acento en la existencia de un círculo vicioso entre desigualdad, desarrollo institucional y naturaleza del proceso político. En dicha explicación, los impuestos, la educación y otros componentes de la política social juegan un papel predominante.

Para Engerman y Sokoloff (1997), las dotaciones iniciales con las que contaba una buena parte de América Latina contribuyeron a la consolidación de un modelo de desarrollo excluyente. En México, parte de América Central y los países Andinos, la existencia de un alto número de indígenas que había que controlar contribuyeron a la creación de sistemas de distribución de la tierra en donde miembros de la élite española recibían grandes propiedades y el control efectivo sobre un número elevado de trabajadores. En Brasil y el Caribe, el clima resultó propicio para el cultivo del azúcar que requería de grandes plantaciones y de un número significativo de trabajadores esclavos.

Acemoglu y otros (2001) también parten de diferencias entre distintas colonias aunque prefieren poner el acento en la variedad de patrones institucionales. En regiones como América Latina se desarrollaron economías de extracción cuyo principal objetivo era apropiarse de la riqueza mineral sin desarrollar ningún tipo de proyecto de desarrollo de largo plazo. Estas economías extractivas concedieron un enorme poder a la élite política cuyo principal objetivo era el control de los recursos naturales y no el desarrollo de largo plazo. En el modelo explicativo desarrollado por Acemoglu y Robinson en diversos artículos,

la concentración del poder en la élite (es decir, la desigualdad política) tiene más importancia que la desigualdad económica pero ambas se pueden entender como vinculadas (ver la excelente descripción de su modelo en Acemoglu, Johnson and Robinson, 2005).

A pesar de estas pequeñas diferencias de enfoque, tanto Engerman y Sokoloff como Acemoglu, Robinson y sus colaboradores tienen una misma explicación sobre cómo se perpetuó la desigualdad tanto política como económica hasta nuestros días. Engerman and Sokoloff (2002, 45) lo resumen bien cuando mantienen que en América Latina “las instituciones políticas resultaron menos democráticas, la inversión en bienes públicos e infraestructura más limitada y las instituciones que se fueron desarrollando tendieron a crear un acceso [más] asimétrico a las oportunidades económicas y, por tanto, favorecer de forma [más] significativa a la élite” que en Norteamérica.<sup>5</sup> La élite utilizó distintos instrumentos para perpetuar la desigualdad, incluyendo un gasto en educación concentrado en el nivel universitario, niveles de impuestos muy bajos y desarrollo tardío de la democracia.

Esta explicación centrada en las relaciones entre condiciones iniciales, poder político y económico de la élite, políticas públicas y perpetuación de la desigualdad se ha convertido en dominante—como queda reflejado en el informe de 2003 del Banco Mundial. El capítulo tres de dicho documento trata de demostrar que América Latina durante el siglo XIX consolidó sistemas políticos con menor representación de las mayorías que en Estados Unidos y otras regiones del mundo, creó toda clase de incentivos para perpetuar la concentración de la tierra e invirtió relativamente poco en salud y educación. En el siglo XX el gasto en educación aumentó pero su calidad siguió siendo muy baja y la relevancia de otros problemas como las fallas en el mercado financiero aumentó.

Hay varios problemas con este tipo de explicación basada en el “path dependence” desde la colonia. En primer lugar, existe cada vez más evidencia de que América Latina no era en su conjunto más desigual que otras regiones del mundo desde los siglos XV al XVIII (Williamson, 2009). Coatsworth (2005, 2008) mantiene que la aceleración de la desigualdad se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX cuando América Latina se incorporó a la globalización y se aceleró el proceso de modernización centrada en el modelo primario exportador. El aumento en la tasa de retorno de la tierra motivó todo un esfuerzo gubernamental por reducir el número de pequeñas y medianas propiedades y aceleró la concentración de la renta y la riqueza en manos de la oligarquía agraria.

Este último punto se vincula con el que quizás sea el problema más importante—y el que más nos interesa a nosotros en el contexto de la discusión del siglo XXI—del enfoque

---

<sup>5</sup> Todas las citas de artículos en inglés han sido traducidas por el autor.



dominante: su falta de atención a las características específicas de la estructura económica latinoamericana y a sus cambios a lo largo del tiempo. Si bien Engerman, Sokoloff, Acemoglu y Robinson ponen de relieve el atraso tecnológico en América Latina nunca sitúan esa discusión dentro de una comprensión más amplia de las particularidades económicas de la región. No es casualidad, por ejemplo, que la desigualdad se acelerara en el momento en que la región adoptó un modelo primario exportador que concentró beneficios en las grandes propiedades agrícolas y marginó a otros muchos actores tanto rurales como urbanos. Al contrario que lo que mantiene el nuevo consenso sobre la desigualdad regional, con la sustitución de importaciones se produjo una reducción en la brecha productiva entre distintos actores, un cambio en los patrones distributivos y, en países como Argentina, Costa Rica, México y Uruguay una reducción de la desigualdad (por ejemplo, para el caso mexicano ver Moreno Brid, Pardinás and Ros, 2009).

Así pues, para entender el por qué de la desigualdad y, sobre todo, para conseguir que caiga en el largo plazo hay que tomar en consideración las características de la estructura productiva latinoamericana incluyendo, sobre todo, el grado y naturaleza de la heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural es un concepto central de la economía estructuralista y se puede definir como la coexistencia, por un lado, de una serie de sectores con altos niveles de productividad—cerca de la frontera tecnológica mundial—junto a una mayoría de actividades con tecnología pre-capitalista y muy bajos niveles de productividad laboral (ver Rodríguez, 1980 para una discusión detallada del concepto en el estructuralismo cepalino). Esto hace que dos personas con niveles similares de cualificación tengan niveles de productividad y, por tanto, también niveles salariales muy distintos según el sector de la economía en la que se encuentren. En los sectores más productivos los beneficios son altos pero, además, los trabajadores reciben salarios altos (al menos en términos relativos); en los sectores más atrasados la productividad es insuficiente para pagar salarios altos o generar beneficios que permitan una expansión sostenida de la acumulación de capital.

La heterogeneidad constituye entonces la base económica-estructural de la desigualdad como se reconoce en el trabajo de la CEPAL desde hace varias décadas. De acuerdo con Pinto y Di Filippo (1976, 93), “esta heterogeneidad constituye el principal factor ‘original’ de la estructura distributiva en América Latina, lo que quiere decir que superarla es un requisito para cualquier modificación del sistema distributivo”. Los datos que ofrecen estos autores sobre las diferencias de productividad entre el sector moderno y el sector que ellos llaman primitivo a finales de los años sesenta son elocuentes: el primero tenía niveles de productividad 29 veces más alto que el segundo. Las diferencias de productividad eran particularmente significativas en el sector minero, donde la productividad del sector

moderno era de 15 mil dólares reales por trabajador comparado con sólo 246 en el sector tradicional. Dichas diferencias de productividad daban lugar a heterogeneidades de carácter social en términos de los sistemas de propiedad, la capacidad de negociación y los tipos de relación laboral entre distintos grupos. Para transformar estas relaciones y contribuir a una mejor distribución primaria de la renta era necesario adoptar nuevas políticas de inversión productiva, incluyendo un gasto en capital humano e infraestructural que beneficiara a los sectores más atrasados (Pinto y Di Filippo, 1976).

Un informe de la CEPAL publicado en el 2010 sobre los retos de la desigualdad en la región recupera el concepto y le dedica todo un capítulo. Allí muestra que todavía existen enormes diferencias en las capacidades productivas de las grandes y pequeñas empresas y también entre algunos sectores y otros. Así por ejemplo, en América Latina la productividad en el sector líder (minería) durante el periodo 2003-2008 era 7.6 veces más alta que la productividad media, mientras que la diferencia entre sector líder y sector más atrasado en Estados Unidos era de sólo 2.2. El informe concluye que “la heterogeneidad estructural contribuye a explicar la profunda desigualdad social de América Latina y el Caribe, ya que las brechas de productividad reflejan, y a la vez refuerzan, las brechas de las capacidades, de incorporación de progreso técnico, de poder de negociación, de acceso a redes de protección social y de opciones de movilidad ocupacional ascendente a lo largo de la vida laboral” (CEPAL; 2010, 92).

La heterogeneidad estructural en la región es significativa no sólo entre sectores (la productividad de los sectores financiero y minero, por ejemplo, suele ser muy superior a la de la agricultura) sino también al interior de cada uno de los sectores. De hecho, gran parte del problema latinoamericano es la polarización entre unas pocas empresas grandes y un universo de empresas informales y de baja productividad. Las empresas situadas en el decil más productivo en Colombia y Venezuela, por ejemplo, son un 500% más productivas que las situadas en el decil más bajo mientras que en Estados Unidos la diferencia es de sólo un 200% (Pagés, 2009).

En un estudio reciente sobre la economía chilena, Infante y Sunkel (2009) demuestran claramente la relación existente entre una estructura productiva fuertemente segmentada y una alta desigualdad en la distribución primaria de la renta. De acuerdo con sus datos, la productividad del trabajo en los sectores más modernos de Chile es de 58 millones de pesos mientras que la de los sectores más tradicionales es de sólo 3.8 millones. Dichas diferencias de productividad se traducen en diferencias salariales dramática: la remuneración de los trabajadores de grandes empresas con altos niveles de productividades es cinco o seis veces mayor que la de los trabajadores en pequeñas empresas atrasadas.

Resaltar la importancia de la heterogeneidad estructural en América Latina no supone negar que haya otros factores que también contribuyan a la inequidad regional. El excesivo poder de la élite y la falta de políticas públicas redistributivas siguen siendo obstáculos graves—como lo reconoce una buena parte de la literatura. Nuestro argumento en esta sección es que, aun si se fueran resolviendo estos problemas, la distribución de la renta no se transformaría de forma radical porque no existirían las bases materiales para ello—conclusión que es esencial para valorar la sostenibilidad futura de las mejoras recientes.

#### **4. ¿Por qué está disminuyendo ahora la desigualdad? ¿Y será sostenible esa reducción?**

Las publicaciones recientes que han tratado de explicar la reducción de la desigualdad en los últimos diez años son totalmente compatibles con la explicación dominante que discutíamos en la sección anterior. Los trabajos econométricos de panel y los estudios de caso que han sido elaborados desde 2007 ponen el acento en dos variables fundamentales: (1) la reducción en la brecha salarial entre los trabajadores cualificados y los no cualificados producto de un aumento en el nivel de educación y quizás también del crecimiento de los salarios mínimos; y (2) el aumento en el gasto social gracias, en gran parte a las transferencias condicionadas.

Quizás el libro más influyente para explicar la trayectoria reciente de la región sea el editado por Luis López Calva y Nora Lustig con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los autores de los estudios de caso de Argentina, Brasil, México y Perú desagregan la contribución de la renta laboral y no laboral al ingreso de distintos grupos poblacionales utilizando datos provenientes de las encuestas de hogares (López-Calva y Lustig, 2010). Dicho análisis muestra, en primer lugar, un aumento de las horas trabajadas y una reducción del diferencial salarial entre los trabajadores cualificados y no cualificados. En México, por ejemplo, la reducción de la desigualdad en el ingreso laboral fue responsable del 87% de la caída del coeficiente de Gini entre 2000 y 2006. Lustig y Lopez Calva achacan esta mejora a un aumento general en el nivel educación de los latinoamericanos—particularmente de los grupos más pobres. De acuerdo con sus cálculos, el coeficiente de Gini de años de educación disminuyó cinco puntos porcentuales en Brasil entre 1998 y 2007, siete puntos porcentuales en México entre 1996 y 2006 y cuatro puntos porcentuales en Perú entre 2001 y 2007. Según su interpretación el aumento en la oferta de mano de obra cualificada habría dado lugar a una reducción de sus salarios relativos—

aunque ellos mismos reconocen que pudiera ser que la demanda de este tipo de trabajadores fuera la que ha disminuido.

En segundo lugar, todos los estudios de caso muestran también el aumento en el ingreso no laboral de los grupos más pobres de la población. De acuerdo con los cálculos de Barros y otros en su capítulo sobre Brasil, entre un 40% y un 50% de la reducción de la desigualdad se debió al ingreso no laboral—pensiones y, en menor medida, Bolsa Familia. En Perú el impacto redistributivo de los ingresos no laborales también fue importante, aunque existen menos datos sobre el efecto concreto de la política social.

Así pues, para López-Calva, Lustig y colaboradores, las políticas sociales (incluyendo el aumento en el gasto educativo) son fundamentales para entender la “década de progreso” en materia distributiva. ¿Cómo se explican dichas políticas públicas en un contexto todavía dominado por las élites? Aunque contestar a esta pregunta va más allá de los objetivos de su estudio, los autores ponen el acento en la naturaleza del sistema político. Según ellos, “las dos últimas décadas en América Latina estuvieron caracterizadas por la vuelta y el fortalecimiento de la democracia... Aunque todavía imperfecta en muchos países latinoamericanos, la democracia ha venido también acompañada de la transición de políticas clientelares a políticas no clientelares” (p. 17). Lustig (2009) muestra, además, la correlación que existe entre gobiernos de izquierda y la reducción de la desigualdad en los últimos años—aunque no establece relaciones de causalidad entre ambas variables.

El incremento en el gasto social y la elección de gobiernos de izquierda son también variables centrales en el análisis que Andrea Cornia realiza sobre los determinantes de las mejoras distributivas en la región. Cornia (2009) utiliza datos de 18 países para el periodo 1990-2007 para estimar el impacto estadístico de una serie de variables políticas y económicas sobre el coeficiente de Gini. En su modelo más completo, las variables dependientes más significativas son el régimen político (tanto los gobiernos social demócratas como los mal llamados populistas tienen un efecto positivo sobre la equidad), la distribución de los años de educación, un tipo de cambio real débil y la evolución del salario mínimo real y del gasto social como porcentaje del PIB. Cornia considera que los resultados de su estudio demuestran que en América Latina se está consolidando un modelo económico social demócrata de “redistribución prudente con crecimiento” (p. 109).

Lo que apuntarían estos estudios sobre la desigualdad reciente, por tanto, es que América Latina podría estar entrando en una nueva etapa en su proceso de desarrollo socioeconómico. La transición a la democracia habría dado lugar ya desde la década de los noventa a un incremento del gasto en educación primaria y secundaria orientado, especialmente, a los grupos de menores ingresos. Más recientemente, la consolidación

democrática contribuyó a la elección de gobiernos de izquierdas en buena parte de América Latina que pusieron más acento en los gastos redistributivos que en el pasado. La democracia ha tenido un efecto positivo incluso en aquellos países como México donde la izquierda no ha gobernado, al forzar a las diversas administraciones a crear y mantener políticas orientadas a la población más pobre—el ejemplo más significativo es el del programa de transferencias condicionadas *Oportunidades*.

La importancia de estos cambios es indudable y probablemente positiva. En la región se han introducido novedades importantes en la política social que han incorporado a grupos marginados al estado social por primera vez y, en algunos casos, han fomentado el llamado universalismo básico. En particular, cuando uno considera a los principales países que formaron parte del movimiento hacia la izquierda (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela) se pueden identificar nuevas políticas radicales y social-demócratas—utilizando la terminología de Reygadas y Filgueira, (2010)—así como continuidades significativas con el periodo liberal anterior. Entre las políticas redistributivas más exitosas hay que destacar el aumento de los salarios mínimos en casi todos los países (con resultados especialmente llamativos en Argentina, Brasil y Uruguay), las reformas de los sistemas de salud para establecer un piso mínimo de derechos para toda la población (como el programa AUGE en Chile) y los programas de transferencias condicionadas ya mencionados (Reygadas y Filgueira, 2010).

La creación de nuevos programas sociales ha sido facilitada por dos procesos: la aceleración del crecimiento económico y el aumento en los ingresos públicos procedentes del boom de las materias primas. En el periodo 2003-2008, América Latina experimentó una media década de crecimiento sostenido que le permitió converger respecto a los países más ricos. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el PIB per cápita regional en dólares de 2000 creció a una tasa media anual de 4.1% comparado con sólo un 1.7% en los países de ingreso alto. El estallido de la crisis económica mundial afectó al crecimiento regional en 2009 pero en el año 2010 y 2011 las economías latinoamericanas volvieron a expandirse y convergen ahora rápidamente a la media de los países ricos. Dicho crecimiento se apoyó en mejoras muy significativas de los términos de intercambio de América del Sur: entre 2003 y 2008 estos aumentaron en un 25.2% en el total latinoamericano con crecimientos particularmente altos en Chile y Perú (54%) y en Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela (95%) (Kacef y López-Monti, 2010).<sup>6</sup> Algunos países latinoamericanos se beneficiaron del

---

<sup>6</sup> Hay que hacer notar que este fue un fenómeno de América del Sur y México, pero no así de Centroamérica (incluyendo a la República Dominicana). De hecho, en esta sub-región los términos de intercambio cayeron en 12% durante ese mismo periodo como consecuencia del aumento en el precio de sus importaciones de recursos naturales y la caída sostenida en el precio relativo de las prendas de vestir.

aumento en este aumento en el precio de las materias primas más que en el pasado gracias a políticas más agresivas de captación de rentas. Quizás el ejemplo más llamativo ha sido el de Bolivia cuyos impuestos totales a los hidrocarburos pasaron de menos de un 20% a principios de los 2000s a más de un 80% después de la “nacionalización”—que fue más bien una renegociación de contratos.

Pese a los avances recientes que parecerían haber debilitado el círculo vicioso discutido en la sección anterior existen motivos para dudar de la sostenibilidad futura de la reducción de la desigualdad. El aumento de los ingresos públicos ha sido moderado y, con la excepción de Brasil, la región sigue teniendo una carga fiscal baja para su nivel de desarrollo—deficiencia particularmente grave en lo referido a los impuestos directos. El impacto redistributivo de la política social, aunque haya mejorado, es todavía muy limitado debido al peso excesivo del gasto en educación universitaria y en pensiones. El caso brasileño es aquí paradigmático: pese a la impresionante mejora distributiva de los últimos años, muy pocas de las reformas introducidas han afectado de forma negativa a los grupos más poderosos. Como muestran Hunter y Sugiyama (2009, 49) en un interesante estudio sobre la trayectoria política brasileña de los últimos años, “la democracia ha generado beneficios que han mejorado el bienestar de segmentos importantes de la población pobre pero raramente a expensas de los grupos políticamente influyentes... Los programas se han extendido a los pobres, pero los privilegios de los más ricos se han reducido en muy pocas ocasiones. Dadas las restricciones de recursos, la extensión de los programas es limitada y gradual por necesidad.” Por último, existen todavía asimetrías muy significativas en la calidad de algunos servicios públicos como la salud y la educación. Este problema empieza a ocupar un lugar privilegiado en la agenda política de países como Chile, donde las protestas recientes han puesto en evidencia las debilidades del sistema educativo heredado del periodo pinochetista.

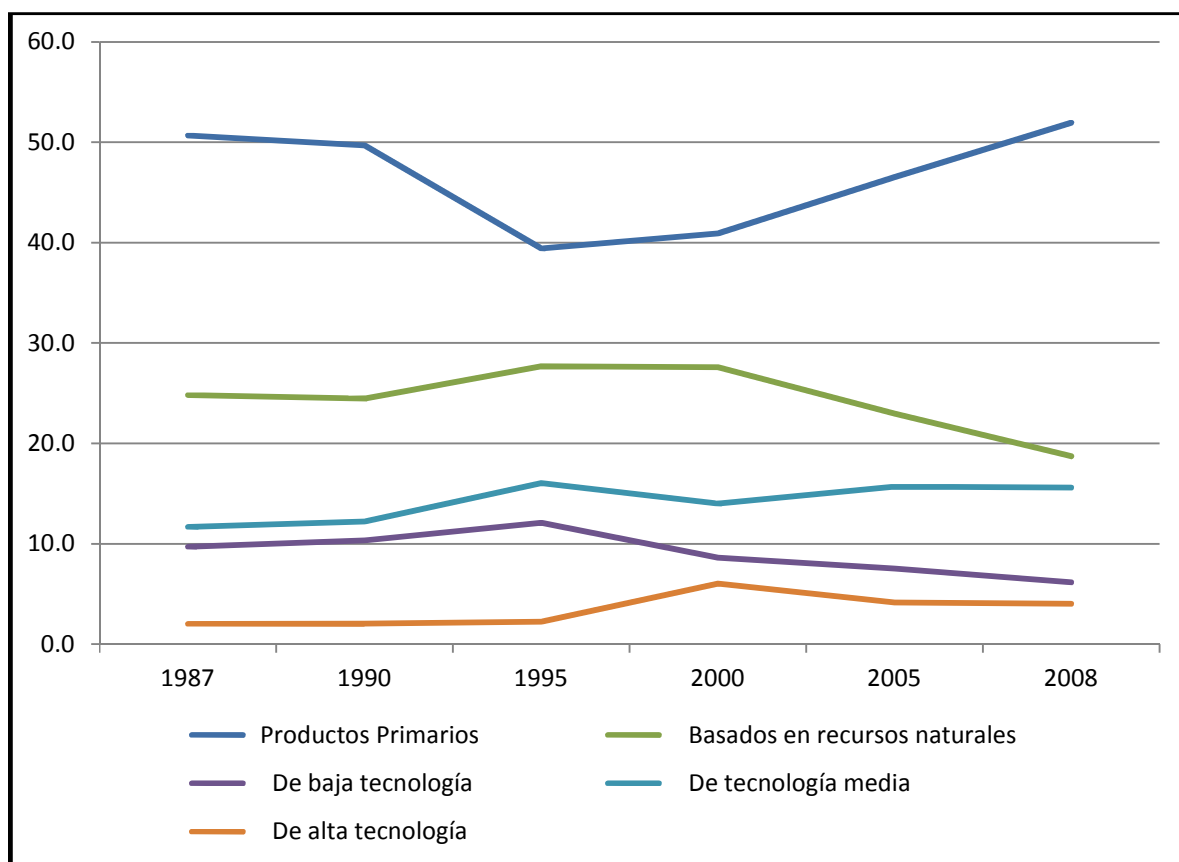
Sin embargo, quizás el mayor problema desde el enfoque estructuralista defendido en este capítulo sea el poco avance que se han producido en materia productiva. Con la posible excepción de Brasil, los gobiernos latinoamericanos han puesto poco acento en fomentar un cambio estructural tendente a promover la productividad de los sectores más atrasados y reducir su distancia con los sectores más avanzados. La política industrial o bien se ha centrado sólo en fomentar los sectores capital intensivos con pocos efectos de arrastre sobre los sectores menos dinámicos (Bolivia con el gas, Costa Rica con semiconductores y software) o en adoptar medidas horizontales para mejorar el ambiente general de negocios o han sido mínimas como en el caso de México (Kohl, 2010; Sánchez-Ancochea, 2011).

En la política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se han producido algunas innovaciones interesantes en materias como la promoción de clusters, la formación continua y la creación de nuevas instituciones encargadas de apoyar a las pequeñas empresas. A pesar de ello, no han sido, en general, políticas centrales en la agenda política y no se han beneficiado de muchos recursos. La mayor parte de países gasta menos de un 0.1% del PIB en este tipo de programas que, en el mejor de los casos, benefician a un 15% de todas las PYMES. En la mayor parte de los casos, además, las microempresas y los trabajadores por cuenta propia han quedado excluidos de cualquier tipo de apoyo (Ferraro y Stumpo, 2010).

La falta de políticas explícitas para la promoción del cambio estructural unido al crecimiento sostenido en el precio de las materias primas en los últimos años ha generado un proceso de reprimarización en América del Sur (CEPAL, 2011; Pérez Caldentey y Vernengo, 2009; Sánchez-Ancochea, 2009). El peso de las materias primas en las exportaciones totales de bienes ha pasado de un 39% en 1995 a un 52% en 2008 (figura 3). Países como Bolivia, Ecuador, Venezuela e, incluso, Chile se han convertido en los principales productores mundiales de minerales como el cobre y de hidrocarburos como el petróleo y el gas. Mientras tanto, el peso de los bienes de alta tecnología—que había crecido de forma significativa durante la segunda mitad de los 90—cayó del 6% al 4% entre 2000 y 2008.

La vuelta a un patrón tradicional de especialización se ha debido, en gran parte, al crecimiento económico chino y a la creciente vinculación de este país con América Latina. Entre 2000 y 2010 el peso del comercio de Asia Pacífico con la región pasó de sólo un 5.3% a un 17.2% en el caso de las exportaciones y del 10.6% al 27.2% en el caso de las importaciones—y China fue responsable de la mitad de estos totales. El 87% de todas las exportaciones latinoamericanas a Asia Pacífico son bienes primarios, porcentaje mucho más alto que en el resto de las regiones (CEPAL, 2011).

**Figura 3. América Latina sin México. Exportaciones por sector, porcentaje del total, 1987-2008**



Fuente: CEPAL (varios años) *Panorama de la inserción internacional de América Latina*, apéndice estadístico

Como veíamos anteriormente, la especialización primario exportadora ha generado recursos importantes para impulsar una agenda social más progresista. Sin embargo, sus efectos directos sobre la distribución primaria de la renta han sido mucho menos benignos. La producción de recursos naturales es, en general, muy intensiva en capital con lo que tiene efectos muy limitados sobre la creación de empleos de alta productividad (Rodrik and McMillan, 2011). Mientras tanto, el aumento de las divisas contribuye a una sobrevaluación de los tipos de cambio (a través del llamado síndrome holandés) y con ello a un proceso de desindustrialización. Aunque la región ha hecho un esfuerzo por frenar la sobrevaluación a través de la acumulación de reservas no ha podido evitar la caída del sector manufacturero. Entre 2000-02 y 2007-09, el peso de dicho sector en el PIB regional disminuyó en un punto porcentual con caídas especialmente preocupantes en Brasil (del 17.1% al 16.0%) y Chile (del 20% al 13%).



Así pues, nos encontramos con un proceso de cambio estructural centrado en el crecimiento de los recursos naturales, la caída de las manufacturas en muchos países y el mantenimiento del sector servicios—centrado en muchos casos en las actividades comerciales—como principal empleador. Aunque todavía no tenemos datos al respecto, este proceso podría haber contribuido a reducir la demanda de mano de obra cualificada y, de esa forma, ayudar a la reducción del diferencial salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados. ¡No la forma más exitosa de redistribuir ingresos! Además, la nueva especialización primaria contribuye a un aumento significativo de las rentas de la tierra con efectos distributivos muy perniciosos pero no siempre recogidos en las encuestas de hogares.

## **5. Conclusión**

Cada vez tenemos más evidencia empírica de que los países de América del Sur han adoptado políticas más efectivas que en el pasado para aprovecharse del boom de las materias primas. La región parece haber puesto en práctica desde mediados de los noventa políticas macroeconómicas cautelosas—incluyendo una acumulación masiva de reservas—que ayudaron a responder a la crisis mundial reciente con medidas anti-cíclicas. El aumento del gasto y de la masa monetaria en el momento en que la economía mundial se ralentizaba permitió proteger a los grupos más pobres de la población y mantener los avances distributivos de los años anteriores.

Este argumento es seguramente más válido en algunos casos (Brasil) que en muchos otros (Argentina, Bolivia, Uruguay). Lo que es cierto es que, en general, los países latinoamericanos mostraron un mayor compromiso con la expansión de nuevos programas sociales que en el pasado. Gobiernos como el de Argentina con su impuesto a las exportaciones o Bolivia y Venezuela con la renegociación de contratos con empresas transnacionales fueron capaces de aumentar sus ingresos públicos de forma muy significativa y utilizaron muchos de esos recursos para expandir el gasto social en transferencias y en salud y educación. Aunque existen dudas sobre la eficacia de algunos de estos esfuerzos (pensemos en las Misiones venezolanas), parece evidente que las rentas de los recursos naturales se han utilizado de forma más progresista que en el pasado. Sin duda, estas son noticias muy positivas para una región que estaba demasiado acostumbrada a ver a la élite enriquecerse de forma exagerada cada vez que mejoraban los términos de intercambio.

El problema, sin embargo, es que no parece que se estén dando cambios estructurales de profundidad en el modelo de acumulación.<sup>7</sup> Todo lo contrario: buena parte de la región ha experimentado un proceso de reprimarización y de consolidación de ventajas comparativas tradicionales. Países como Argentina con la soya, Bolivia con el gas, Chile con el cobre o Venezuela con el petróleo dependen hoy todavía más que hace algunas décadas de la producción de unos pocos productos que son muy intensivos en capital y crean pocos puestos de trabajo. En esas circunstancias, ¿qué pasará cuando caigan los precios de las materias primas en el futuro? ¿Serán los gobiernos capaces de mantener sus maquinarias redistributivas? ¿Y cuáles van a ser los motores económicos que permitan un crecimiento sostenido de la productividad agregada y reduzcan su dispersión sectorial?

Como queda reflejado en el trabajo reciente de Rodrik y colaboradores sobre el cambio estructural, sin un sector manufacturero dinámico (junto a la modernización de muchos servicios) es imposible asegurar un incremento sostenido de puestos de trabajo productivos y con niveles de ingreso crecientes (Rodrik y Mcmillan, 2011; Rodrik, 2011). Fomentar ese cambio estructural es una tarea difícil pero cada vez más urgente.

El fortalecimiento de la especialización primario exportadora en la región está teniendo, además, efectos muy negativos sobre el nivel de conflicto—como lo pone en evidencia los trabajos de Grassa y Serra en este volumen. Esto es así porque se están acelerando las tensiones entre distintos grupos respecto al uso del espacio. Mientras que las élites políticas nacionales (tanto las más radicales como las más neoliberales) quieren avanzar en el proceso de explotación de los recursos naturales, muchas comunidades indígenas defienden políticas mucho más cautelosas y exigen el respeto al uso del suelo para otras actividades. Nos encontramos así con choques en Guatemala por el oro, en Bolivia por la construcción de carreteras, en la Sierra del Perú por la minería y en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú por la plantación de coca—por poner sólo algunos ejemplos.

La región se encuentra, por tanto, ante una gran oportunidad de construir un modelo más inclusivo y más democrático que pueda reducir algunos conflictos. Sin embargo, se enfrenta también a una grave amenaza: como crear modelos económicos más dinámicos, menos heterogéneos y menos dependientes de la sobre-explotación de la tierra. ¿De qué depende aprovechar oportunidades y reducir riesgos?

---

<sup>7</sup> Tampoco parece haberse resuelto la enorme asimetría en la calidad de los servicios públicos. El gasto público en educación secundaria, por ejemplo, ha aumentado pero en muchos países el número de estudiantes ha crecido todavía más rápido y la calidad de la enseñanza es particularmente baja en las áreas más pobres. Esto está haciendo que segmentos muy significativos tanto de los pobres como de la clase media estén empezando a protestar de forma enérgica en buena parte de la región, desde Chile a la República Dominicana.

En gran medida el reto no es económico sino político. Por ello, consideramos útil terminar el capítulo con algunas reflexiones sobre las posibilidades de conseguir un cambio político que permita poner a la heterogeneidad estructural en la agenda política futura. Para este breve análisis recuperamos el concepto de autonomía estatal con lazos sociales—en inglés “embedded autonomy”—que Peter Evans acuñó hace ya más de quince años (Evans, 1995). A partir del estudio del milagro coreano, el sociólogo estadounidense resaltó la importancia de crear burocracias weberianas capaces de diseñar proyectos nacionales de desarrollo sin presiones externas excesivas. Para él, además, era necesario que esas burocracias no estuvieran en una torre de marfil sino que colaboraran de forma estrecha con los sectores más dinámicos de la élite económica nacional.

Siguiendo este esquema, el primer gran reto para América Latina es el de mejorar la calidad de la burocracia estatal. Todos los gobiernos deberían invertir más capital político en llevar a cabo reformas del estado que conviertan a las burocracias en instituciones menos politizadas y con un sistema de toma de decisiones más ágil y transparente. Siguiendo las enseñanzas de los países asiáticos (desde Japón a Singapur y Taiwán) es importante, además, que el proceso de fomento del cambio estructural se convierta en una prioridad pública y se centralice en unidades cercanas a la presidencia. Dichos ministerios deberían ser capaces de diseñar estrategias que mejoren la productividad de las pequeñas y medianas empresas y, además, vinculen de forma más estrecha a los sectores punta (minería, hidrocarburos, zonas francas en Centroamérica) con los sectores más atrasados.

Por desgracia, este proceso de transformación del estado presenta muchísimos obstáculos: en países como Bolivia, por ejemplo, no existe un número suficiente de profesionales que puedan formar parte de un servicio civil más eficiente; en otros países como Venezuela el debate público está tan politizado que construir una burocracia autónoma es simplemente un sueño imposible. Además, casi todos los gobiernos de izquierda parecen más interesados en impulsar una agenda rápida de transformación social que en crear un nuevo sector público (Panizza, 2011 ofrece una excelente discusión sobre el caso uruguayo).

Todavía más difícil que la transformación del Estado es la creación de coaliciones estado-sociedad que apoyen una transformación productiva equitativa. Obviamente las dificultades en cada país son muy distintas: no es lo mismo Brasil donde existe una clase empresarial muy poderosa pero también muy interesada en el desarrollo industrial que Venezuela donde el capital nacional siempre ha sido rentista o Costa Rica donde todavía queda un sector cooperativo más o menos influyente. En general, sin embargo, lo más necesario en casi todos los países es encontrar contrapesos al poder de los grandes terratenientes que no tiene ningún interés en el cambio estructural (piénsese en el caso

argentino y el debate en torno a los impuestos a las exportaciones). Se necesita, además, fortalecer una clase de pequeños y medianos empresarios con deseos de mejorar la productividad de los servicios y de productos manufacturados concretos y con vinculaciones a los gobiernos de izquierdas. A ellos se deberían unir parte de los nuevos movimientos sociales que representan a la clase media baja. La creación de esas coaliciones entre productores dinámicos y movimientos sociales (en torno, por ejemplo, a políticas crediticias o a la protección comercial de sectores específicos) debería ser el objetivo de los gobiernos verdaderamente progresistas pero ha estado hasta ahora demasiado lejos de la agenda regional.

## **Bibliografía**

- Acemoglu, D., S. Johnson y J. Robinson (2001) "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation", *American Economic Review*, 91, 1369-1401.
- Acemoglu, D., S. Johnson y J. Robinson (2005) "Institutions as fundamental cause of long-run growth." En Aghion, P. y S. Durlauf (eds) *Handbook of Economic Growth*, Amsterdam: Elsevier North Holland.
- CEPAL (2010) "Structural heterogeneity and productivity gaps: from fragmentation to convergence". En *Time for Equality: Closing Gaps, Opening Trails*, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- CEPAL (2011) *Panorama de la inserción internacional de América Latina, 2010-2011*, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Clements, B. (1997) "The Real Plan, Poverty and Income Distribution in Brazil", *Finance & Development*, International Monetary Fund.
- Coatsworth, J. (2005) "Structures, Endowments, and Institutions in the Economic History of Latin America", *Latin American Research Review*, 40 (3), 126-144.
- Coatsworth, J. (2008) "Inequality, Institutions and Economic Growth in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, 40, 545-569.
- Cornia, A. (2010) "Income Distribution under Latin America's New Left Regimes," *Journal of Human Development and Capabilities*, 11(1), 85-114.
- Engerman, S. y K. Sokoloff (1997) "Factor Endowments, Institutions and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States." En Haber, S. (ed.) *How Latin America Fell Behind: Essays on the*

- Economic Histories of Brazil and Mexico, 1800-1914*, Stanford: Stanford University Press.
- Engerman, S. y K. Sokoloff (2002) "Factor Endowments, Inequality, and Paths of Development among New World Economies", *Economia*. 3(1), 41-88.
- Evans, P. (1995) *Embedded Autonomy. States and Industrial Transformation*, Princeton: Princeton University Press.
- Ferrano, C y G. Stumpo (2010) *Políticas de apoyo a las PYMES en América Latina. Entre avances innovadores y desafíos institucionales*, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Hunter, W. and N. Sugiyama (2009) "Democracy and Social Policy in Brazil: Advancing Basic Needs, Preserving Privileged Interests", *Latin American Politics and Society*, 51(2), 29-58.
- Infante, R. y O. Sunkel (2009) "Chile: hacia un desarrollo inclusivo", *Revista de la CEPAL*, 97, 135-154.
- IPEA. (2008) "Pobreza e Mudança Social" *Comunicado da Presidência*, n.9, Septiembre.
- Kacef, O. y R. López-Monti (2010) "América Latina del auge a la crisis: desafíos de política macroeconómica", *Revista de la CEPAL*, 100, 41-68.
- Kohl, B. (2010) "Bolivia under Morales: A Work in Progress", *Latin American Perspectives*, 37(3), 107-122.
- López-Calva, L. y N. Lustig (2010) *Declining Inequality in Latin America. A Decade of Progress?* Washington, DC: Brookings Institution.
- Lustig, N. (2009) "Poverty, Inequality and the "New Left" in Latin America", *Woodrow Wilson International Centre for Scholars*.
- Moreno-Brid, J.A., J. Pardinás y J. Ros (2009) "Economic development and social policies in Mexico" *Economy & Society*, 38(1), 154-176.
- Panizza, F. (2011) "Gobiernos de izquierda y reforma de la Administración Pública: El caso del Frente Amplio en Uruguay (2005-10)", *ponencia presentada en la conferencia "Post-neoliberalism en América Latina, 7 Octubre*, Universidad de Sheffield.
- Pages, C. (ed) (2009) *La era de la productividad*, Washington: Banco Inter-Americano de Desarrollo.
- Pérez, E. y M. Vernengo (2008) "Back to the Future: Latin America's Current Development Strategy" en [http://www.networkideas.org/featart/aug2008/fa02\\_Back2Future.htm](http://www.networkideas.org/featart/aug2008/fa02_Back2Future.htm).

- Pinto, A. y Di Filippo, A. (1976) "Notes on income distribution and redistribution strategy in Latin America." En Foxley, A. (ed.) *Income distribution in Latin America*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Reygadas, L. y F. Filgueira (2010) "Inequality and the Incorporation Crisis: The Left's Social Policy Toolkit." En Cameron, M. y R. Hershberg (eds) ) *Latin America's Left Turns. Politics, Policies and Trajectories of Change*, London: Lynn Rienner.
- Rodríguez, O. (1980) *Teoría del subdesarrollo de la CEPAL*, México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores.
- Rodrik, D. (2011) "Unconditional convergence", *unpublished manuscript*, Harvard University.
- Rodrik, D. y McMillan (2011) "Globalization, Structural Change and Productivity Growth", *NBER Working Paper*, no 17143.
- Sánchez-Ancochea, D. (2009) "El modelo económico en América Latina desde los años noventa hasta la Gran Crisis ¿Un modelo razonable o un fracaso liberal? *Revista CIDOB D'Afers Internacionals*, 85-86, 133-155.
- Sánchez-Ancochea, D. (2011) ¿Hacia un desarrollo superficial o los inicios del salto tecnológico? Exportaciones de maquilas y desarrollo económico en Costa Rica, *LATN Working Paper 135*, Serie Comercio y Crecimiento Inclusivo.
- Williamson, J. (2010) "Five Centuries of Latin American Income Inequality", *Revista de Historia Económica*, 28(2), 227-252.